



48  
FORMA A-55  
51

AMPARO DIRECTO EN REVISION 2071/93.

QUEJOSO: GRUPO DE CONSULTORES METRO  
POLITANOS, S. A. DE C. V.  
RECURRENTE: PROCURADOR FISCAL DE LA  
FEDERACION.

MINISTRO PONENTE: DR. JUVENTINO V. CASTRO CASTRO.  
SECRETARIO: LIC. INDALFER INFANTE GONZALES.

COTEJADO:

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco.

V I S T O S para resolver los autos del tomo 2071/93, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Procurador Fiscal de la Federación, en ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, en contra de la sentencia dictada el siete de octubre de mil novecientos noventa y tres, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 255/93; y,

R E S U L T A N D O :


I.- Por escrito presentado el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y dos, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Fiscal de la Federación, Sergio Castorena Juárez, en su carácter de representante legal de Grupo de Consultores Metropolitanos, S. A. de C. V., promovió juicio de amparo directo en contra de la autori



CORTE DE JUSTICIA  
A N A C I O N  
G E N E R A L D E M E J I C O

A. D. en R. 2071/93.

dad y por los actos que a continuación se mencionan:

"AUTORIDAD RESPONSABLE: Sexta Sala Regional Me-  
"tropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación. - - - -  
"ACTO RECLAMADO: La sentencia dictada por la Sexta Sala -  
"Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federa-  
"ción en el juicio Contencioso administrativo 4546/92, in-  
"terpuesto por Grupo de Consultores Metropolitanos, S.A.  
"de C. V. en contra de las resoluciones contenidas en el  
"oficio número 102-A-12-C-I-1-3468, expediente - - - -  
"GCM-850723-883, de fecha 31 de enero de 1992:   
"termina a cargo de Grupo de Consultores Metropolitanos,  
"S.A. de C.V. los siguientes créditos: A.1) Por concepto-  
"de diferencias del impuesto sobre la renta de los ingre-  
"sos por salarios y en general por la prestación de un -  
"servicio personal subordinado por el ejercicio comprendi-  
"do del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1987: - - - -  
"\$22.342,191.00; A.2) Por diferencia del impuesto sobre -  
"la renta de los ingresos por salarios y en general por -  
"la prestación de un servicio personal subordinado por el  
"período comprendido del 1o. de enero al 31 de octubre de  
"1988; \$30.674,668.00; A.3) Por diferencia del impuesto -  
"sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal -



A. D. en R. 2071/93.

"prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón, -  
"por el ejercicio comprendido del 1o. de enero al 31 de -  
"diciembre de 1987: \$1,144,375.00; A.4) Por concepto de -  
"diferencia del impuesto sobre erogaciones por remunera-  
"ción al trabajo personal prestado bajo la dirección y de-  
"pendencia de un patrón por el período del 1o. de enero -  
"al 31 de octubre de 1988: \$44,127.00. B) Que impone a -  
"Grupo de Consultores Metropolitanos, S.A. de C.V. una -  
"multa del orden de \$127,796,712.50 por contribuciones -  
"omitidas y/o pagadas a gestión de autoridad. Los puntos  
"dispositivos de la sentencia reclamada en el juicio cons-  
"titucional que inicio mediante el presente escrito son -  
"del tenor literal siguiente: I.- La parte actora no pro-  
"bó su acción. II.- Se reconoce la validez de la resolu-  
"ción impugnada."

§ II.- La parte quejosa invocó como garantías -  
violadas las que consagran los artículos 14 y 16 de la -  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; -  
señaló como terceros perjudicados a la Secretaría de Ha-  
cienda y Crédito Público y al Titular de la Administra-  
ción Fiscal Federal Norte del Distrito Federal, y expre-  
só los conceptos de violación que estimó pertinentes.

E JUSTICIA  
CION  
E ACUERDO

A. D. en R. 2071/93.

III.- El Quinto Tribunal Colegiado en Materia --  
Administrativa del Primer Circuito, a quien correspondió--  
conocer del asunto por razón de turno, admitió la demanda--  
de garantías, registrándola con el número de expediente --  
DA 255/93; seguido que fue el procedimiento por sus trámi--  
tes respectivos, el siete de octubre de mil novecientos --  
noventa y tres, pronunció sentencia, cuyo punto resoluti--  
vo es:

"UNICO.- La Justicia de la Unión ampara y SECRETARÍA DE LA FISCALÍA  
"teje a Grupo de Consultores Metropolitanos, Sociedad Anóni--  
"ma de Capital Variable, en contra del acto que reclama--  
"de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fis--  
"cal de la Federación, consistente en la sentencia de pri--  
"mero de octubre de mil novecientos noventa y dos, dictada  
"en el juicio fiscal número 4546/92, para el efecto preci--  
"sado en el último considerando de esta ejecutoria.

Dicha sentencia en la parte que interesa dice:

"SEPTIMO.- En cambio, es fundado el quinto con--  
"cepto de violación que se hace valer, en su primera parte,  
"suplido en sus deficiencias en términos de lo establecido  
"en la fracción VI del artículo 76, bis, de la Ley de Ampa--  
"ro, en el que se plantea la inconstitucionalidad de la --  
"fracción III, del artículo 76, del Código Fiscal de la Fe-



A. D. en R. 2071/93.

"deración. En primer término, cabe decir que aun cuando -  
"la quejosa menciona el artículo 46, fracción III, del Có-  
"digo Fiscal de la Federación, de la lectura de dicho con-  
"cepto se advierte que se refiere al artículo 76, fracción  
"III, del aludido ordenamiento legal, por lo cual se corri-  
"ge el error en la cita, en términos de lo dispuesto en el  
"artículo 79, de la Ley de Amparo. El artículo 76, frac-  
"ción III, del Código Fiscal de la Federación establece: -  
"Artículo 76.- Cuando la comisión de una o varias infrac-  
"ciones origina la omisión total o parcial en el pago de -  
"contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, ex-  
"cepto tratándose de contribuciones al comercio exterior,-  
"y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante -  
"el ejercicio de sus facultades de comprobación, se aplica-  
"rán las siguientes multas: ... III.- El 150 % de las con-  
"tribuciones emitidas en los demás casos. El artículo 22-  
"de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-  
"nos, establece que quedan prohibidas, entre otras, la mul-  
"ta excesiva. Si bien el precepto constitucional de que -  
"se trata, no establece un límite para la imposición de --  
"las multas, también lo es que prohíbe la multa excesiva,-  
"de donde se desprende que para su imposición deberá to-  
"marse en cuenta la gravedad de la infracción, los perjui-





A. D. en R. 2071/93.

"cios ocasionados y la reincidencia en la comisión del hecho  
"que la motiva, en relación con la capacidad económica del  
"infractor. Lo anterior es así, porque una multa es exce-  
"siva cuando la sanción pecuniaria impuesta al infractor,-  
"sale de los límites de lo ordinario o de lo razonable, o-  
"cuando está en desproporción con las posibilidades econó-  
"micas del multado o de la gravedad de la infracción; por-  
"lo tanto, resulta claro que para que una multa sea consti-  
"tucional, debe estar en función a las características <sup>ALFONSO GORTI</sup> ~~infractor~~  
"individuales del multado, ya que de no observar éstas puede  
"resultar excesiva para unos y moderado o leve para otros.  
"Siguiendo los lineamientos precisados, cabe considerar --  
"que para el establecimiento de una multa en un precepto -  
"legal, por mandato constitucional el legislador debe pre-  
"ver lo necesario para que al ser aplicada por la autoridad  
"no resulte excesiva, para lo cual se necesita que se tomen  
"en cuenta las condiciones individuales del infractor en -  
"concordancia con el hecho que la motiva. En las relacio-  
"nadas condiciones, por lo que toca a la ley, debe conside-  
"rarse que un precepto legal prevé una multa que puede ser  
"considerada excesiva y, por lo tanto, inconstitucional, -  
"cuando fije una cantidad invariable y para su imposición-  
"no establezca que deba tomarse en cuenta la gravedad de --



- 7 -

A. D. en R. 2071/93.

"la infracción realizada, los perjuicios ocasionados a la  
 "colectividad y la reincidencia en la comisión del hecho -  
 "que la motiva, todo ello en relación con la capacidad eco-  
 "nómica del infractor. Esto es así, porque al establecer-  
 "se un sistema de multas fijas, no puede apreciarse desde-  
 "el punto de vista legal, el carácter excesivo de la multa  
 "impuesta, debido a que la autoridad administrativa no está  
 "obligada a individualizar el monto de la sanción y, por lo  
 "tanto, no existen parámetros de comparación, para determi-  
 "nar si la multa carece o no de proporcionalidad o si va -  
 "más allá de lo razonable. Así las cosas, al establecer -  
 "el legislador en la fracción III, del artículo 76, del Co-  
 "digo Fiscal de la Federación, un porcentaje único, como -  
 "multa por la comisión de infracciones que originen la omi-  
 "sión total o parcial en el pago de contribuciones, que -  
 "sean descubiertas por las autoridades fiscales mediante -  
 "el ejercicio de sus facultades de comprobación, incurre -  
 "en violación al artículo 22 constitucional, en virtud de-  
 "que al no tomar en cuenta las circunstancias especiales -  
 "del infractor y la gravedad de la infracción, que permi-  
 "tan la individualización de la sanción, deja la posibili-  
 "dad de la aplicación de multas excesivas, aunque esto no-  
 "se desprenda del porcentaje en sí mismo considerado, pues



PODER JUDICIAL DE LA  
 FEDERACION

A. D. en R. 2071/93.

"al establecer un sistema rígido en la cuantía, basta que-  
"la autoridad hacendaria descubra, en uso de sus facultades  
"de comprobación, la omisión en el pago de la contribución,  
"para que el contribuyente sea sancionado en la misma for-  
"ma. Es aplicable, el criterio sustentado por el Pleno de  
"la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el-  
"veintiuno de enero de mil novecientos noventa y tres, en  
"amparo directo en revisión número 284/92 interpuesto en  
"contra de la sentencia pronunciada por este Tribunal Cole-  
"giado el ocho de noviembre de mil novecientos no-  
"venta y uno, en el juicio de amparo directo número D.A. 1565/91,-  
"promovido por Editorial Nova, Sociedad Anónima de Capital  
"Variable. En consecuencia, procede concluir que la frac-  
"ción III del artículo 76, del Código Fiscal de la Federa-  
"ción, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil-  
"novecientos ochenta y nueve, es contraria a lo dispuesto-  
"por el artículo 22, de la Constitución General de la Repú-  
"blica y, por lo tanto, resulta inconstitucional la resolu-  
"ción reclamada por cuanto reconoce la validez de la multa  
"impuesta con base en la fracción y precepto citados, en  
"la resolución contenida en el oficio número - - - - -  
"102-A-12-C-I-1-3463, de fecha treinta y uno de enero de -  
"mil novecientos noventa y dos. En las relacionadas condi





- 9 -

A. D. en R. 2071/93.

"ciones, habiendo resultado fundado la primera parte del -  
 "quinto concepto de violación hecho valer, procede conce-  
 "der el amparo y la protección de la Justicia Federal soli-  
 "citado, para el efecto de que la Sala responsable deje in-  
 "subsistente la sentencia reclamada, únicamente por lo que  
 "se refiere a la multa impuesta con fundamento en la frac-  
 "ción III del artículo 76, del Código Fiscal de la Federa-  
 "ción y, en su lugar, dicte otra siguiendo los lineamien-  
 "tos expuestos en este considerando."

IV.- Inconforme con dicho fallo, el Procurador-  
 Fiscal de la Federación en ausencia del Secretario de Ha-  
 cienda y Crédito Público, interpuso recurso de revisión.

Por acuerdo de dos de diciembre de mil novecien-  
 tos noventa y tres, el Presidente de este alto Tribunal -  
 admitió el recurso de referencia y mediante proveído dic-  
 tado el once de enero de mil novecientos noventa y cuatro,  
 turnó el asunto al Ministro Carlos Sempé Minvielle para -  
 la elaboración del proyecto correspondiente.

El Agente del Ministerio Público Federal adscri-  
 to formuló pedimento en el sentido de que se confirme en-  
 sus términos la resolución recurrida y se conceda el ampa-  
 ro.

Mediante promociones presentadas en la Oficina de

E JUSTICIA  
 CION  
 DE AGUAS

A. D. en R. 2071/93.

Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema-Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de mayo y cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, el Procurador Fiscal de la Federación solicitó la continuación y decisión de la alzada.

Por auto de siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó el retorno del presente asunto al señor Ministro Juventino V. Castro Castro, a fin de que elaborara la resolución que correspondiera.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, en relación con el 84, fracción II de la Ley de Amparo; y 11, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se interpone contra una sentencia dictada en materia de amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la cual se decide sobre la constitucionalidad de un precepto del Código Fiscal de la Federación, subsistiendo en el recurso el problema de constitucionalidad.



- 11 -

A. D. en R. 2071/93.

SEGUNDO.- El agravio hecho valer en la revisión es del tenor literal siguiente:

UNICO.- Violación a lo dispuesto por los artículos 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo y 22 constitucional, tomando en consideración el hecho de que el Quinto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución que se recurre, realizó un indebido análisis de lo preceptuado por el artículo 76, fracción III del Código Fiscal de la Federación, tomando en consideración las circunstancias que se anotan a continuación: En principio debemos señalar que el órgano colegiado parte de una indebida interpretación al considerar que la multa en el artículo 76 fracción III del Código Fiscal de la Federación, en el que se establece un porcentaje del 150 % de las contribuciones omitidas, resulta excesiva, toda vez que dicho precepto, señala un porcentaje determinable y con ello no se vulnera el artículo 22 de nuestra Carta Magna. En efecto, el a quo parte indebidamente del criterio de considerar que por no efectuarse la individualización de la multa, específicamente por lo que se refiere a tomar en cuenta la gravedad de la infracción y sus consecuencias, por ese simple hecho se está en presencia de una multa ex-



DE JUSTICIA  
ACION  
Y DE ACUERDO

A. D. en R. 2071/93.

"una multa excesiva, lo cual resulta inaceptable ya que --  
"tal requisito va referido a la situación patrimonial del-  
"particular, y por ello no puede llegar a considerarse co-  
"mo excesiva, situación en la que se basó el legislador pa-  
"ra establecer el porcentaje de la multa que prevé el ar-  
"tículo 76 del Código Fiscal Federal, por lo que resulta -  
"ilegal el alcance que otorgó el Tribunal Colegiado a lo  
"ordenado por el artículo 22 constitucional. Lo anterior  
"es así, en razón de que aun y cuando la autoridad estudi-  
"la gravedad de la infracción cometida por el particular COI  
"decida imponerle determinada sanción ésta puede ser exce-  
"siva si no se atiende a la capacidad económica de dicho -  
"sujeto, pues de ahí es de donde puede desprenderse si la-  
"multa es o no excesiva, sin que necesariamente deba aten-  
"derse al establecimiento entre un mínimo y un máximo del-  
"monto de la multa, toda vez que dicho parámetro atenderá-  
"primordialmente a la gravedad, reincidencia o atenuantes-  
"que se observen en la conducta infractora, lo cual en da-  
"do caso que la autoridad no lo llegase a tomar en conside-  
"ración, podría resultar contrario al principio de funda--  
"mentación y motivación. Asimismo, la circunstancia de que  
"no se deje a criterio de la autoridad exactora el fijar -  
"el monto de la imposición de la multa correspondiente, es



- 13 -

A. D. en R. 2071/93.

"en beneficio del propio infractor, quien incluso, sabe de  
"antemano la sanción que se le habrá de imponer, según la-  
"hipótesis en que se coloque, pues de otra manera se llega  
"ría al caso de que la imposición de la multa resultaría -  
"injusta, ya sea por lo reducida o por lo elevada, y se po-  
"dría perder la proporcionalidad que se pretende conservar,  
"conforme a los principios fiscales, en respeto a las ga-  
"rantías consignadas por el artículo 31, fracción IV, de -  
"la Constitución General de la República, lo que además -  
"otorga pleno respeto a la garantía de seguridad jurídica.  
"De lo antes expuesto, se colige que se encuentren armoni-  
"zadas las disposiciones relativas a las sanciones, siguien-  
"do el principio de proporcionalidad y equidad, y en el ca-  
"so de que se trata, la sanción del ciento cincuenta por -  
"ciento toma en cuenta la circunstancia de que el infractor  
"no haya pagado las contribuciones omitidas junto con sus-  
"tanciosos antes del cierre del acta final de visita, ni-  
"después de ese cierre, pero antes de que las autoridades-  
"le notifiquen la resolución que determine el monto de las  
"contribuciones que omitió. Es importante destacar que el  
"razonamiento del Tribunal Colegiado, en el sentido de con-  
"siderar constitucional la imposición de la sanción única-  
"mente cuando además del porcentaje fijo, éste asimismo -

DE JUSTICIA  
ACION  
AL REACUER







- 15 -

A. D. en R. 2071/93.

"desconocer la naturaleza tanto del impuesto como de sus -  
 "accesorios (multa) y sobre todo la interrelación que sub-  
 "siste en ellos. Por otra parte, es importante agregar --  
 "que el hecho de que la multa se determine con base en un-  
 "porcentaje determinable no implica que sea excesivo pues-  
 "esta característica no se determina única y exclusivamen-  
 "te mediante la aplicación de márgenes que oscilan entre -  
 "mínimos y máximos, sino analizando la situación patrimo-  
 "nial del particular, atendiéndose para ello en materia --  
 "fiscal, al total de los impuestos omitidos. En este sen-  
 "tido, debemos entender que el establecimiento de un por-  
 "centaje determinable, por su simple hecho, no puede ni de-  
 "be ser considerado como excesivo, pues lo cierto es que-  
 "si se llegase a sostener que sí lo es, sería en apoyo a una  
 "interpretación literal y restringida, lo cual no es admi-  
 "sible, toda vez que ese término como ya lo hemos menciona-  
 "do debe verse a través de distintos aspectos o parámetros  
 "y no únicamente en uno de ellos. El Tribunal Colegiado -  
 "al que tocó conocer del presente juicio de amparo directo  
 "basa sus consideraciones para conceder el amparo a la que  
 "josa, en estimar que lo dispuesto por el artículo 76, --  
 "fracción III del Código Fiscal de la Federación, contravie-  
 "ne abiertamente lo preceptuado por el numeral 22 de la --



A. D. en R. 2071/93.

"Constitución, por considerar que se está en presencia de-  
"un dispositivo que posibilita la imposición de multas exce-  
"sivas, ello por haber analizado en forma aislada, tal pre-  
"cepto legal y no en su conjunto y en relación con las de-  
"más disposiciones que integran tal cuerpo legal, así como  
"relacionándola con las demás disposiciones que se refie-  
"ren al cumplimiento de obligaciones tributarias. En efe-  
"to, el Código Fiscal adoptó un procedimiento para la impo-  
"sición de sanciones tomando en cuenta atenuantes, agravantes  
"y época de pago, la conducta del infractor, reinciden-  
"cia y su capacidad económica, con la finalidad de no de-  
"jarlo al arbitrio de la autoridad fiscal. Por otro lado,  
"no es de considerarse que la multa sea desproporcional a-  
"la capacidad económica del contribuyente, dado que a mayo-  
"res contribuciones, evidentemente es mayor la capacidad -  
"económica, pues debe recordarse que éstas van en relación  
"directa con el monto de la utilidad que obtiene el parti-  
"cular, lo cual sin duda alguna es característico de sus -  
"grados de capacidad económica o riqueza lo mismo sucede --  
"con las contribuciones omitidas por la imposición de las-  
"multas, pues éstas guardan una relación estrecha con aqué-  
"llas. En esta tesitura es evidente que en la especie, el  
"sistema de imposición de sanciones establecido o previsto



- 17 -

A. D. en R. 2071/93.

"por el artículo 76, fracción III del Código Fiscal de la-  
 "Federación, no resulta contrario de lo dispuesto por el -  
 "artículo 22 Constitucional, tomando en consideración la -  
 "circunstancia de como ya se señaló con anterioridad, no -  
 "se está en presencia de una sanción que pueda considerar-  
 "se válidamente como excesiva, tomando en cuenta que la -  
 "multa irá siempre en función de la infracción cometida, -  
 "el impuesto omitido y que se tomará en consideración la -  
 "capacidad económica del particular así como el hecho de-  
 "que el contribuyente sea reincidente o no, o que haya exis-  
 "tido dolo en la comisión de la infracción. Por las ante-  
 "riores razones, no resulta aplicable al presente caso, el  
 "criterio contenido en las Tesis de Jurisprudencia que se-  
 "citan en la resolución que se recurre, toda vez que en es-  
 "tricto derecho, no debe seguirse entratándose de multas -  
 "fiscales, pues en la aplicación de éstas, no tiene que ob-  
 "servarse el contenido del artículo 22 Constitucional, como  
 "a continuación se pasa a demostrar: Por principio, resul-  
 "ta conveniente señalar que el término multa excesiva, es-  
 "introducido por primera vez en el año de 1856 al proyec-  
 "tarse el antecedente décimo cuarto al Proyecto de Consti-  
 "tución Política de la República Mexicana, fechado en la -  
 "Ciudad de México el 16 de junio de 1856. Asimismo, cabe-

DE JUSTICIA  
 IACION  
 AL DE ACUERDO

A. D. en R. 2071/93.

"mencionar, que desde la Constitución de 1812 hasta la de  
"1857, la aplicación de las penas propiamente dichas, era--  
"exclusiva de la autoridad judicial y se aplicaba como es--  
"carmiento para algunos yerros, tal y como se cita en la -  
"obra de Montiel y Duarte, Isidro, denominada Estudio So--  
"bre Garantías Individuales, Cuarta Edición Facsimilar, --  
"Editorial Porrúa, México 1983, Página 53 y 54. No debe -  
"perderse de vista que la multa es introducida como un me--  
"dio de represión que es admitido en todos los Códigos,  
"que por desgracia vino a ser materia de constantes abusos  
"así por su desproporción como por la inconveniencia con  
"que se prodigó, aplicándola a todo género de delitos  
"que se trató de corregir en la Constitución de 1857. En--  
"efecto, para corregir los constantes abusos en la aplica--  
"ción de las penas, el Legislador de 1857, dispuso en el -  
"artículo 21 de la Constitución del año citado, que la au--  
"toridad política o administrativa podía castigar correc--  
"cionalmente cierta clase de faltas con pena pecuniaria que  
"no excediera de \$500.00 pesos o bien, con la corporal que  
"no pasara de un mes de reclusión, y la declaración de la--  
"pena en que el delincuente había incurrido, la reservó en  
"forma exclusiva a la autoridad judicial, tal y como se en  
"cuentra expresada en la actualidad. Ahora bien, la compe





- 19 -

A. D. en R. 2071/93.

"tencia para sancionar las faltas citadas en primer término  
 "del párrafo anterior, estaba conferida al Presidente de -  
 "los Estados Unidos Mexicanos, por disposición del artícu-  
 "lo 77 de la Constitución de 1857 y la forma para aplicar-  
 "la se encontraba determinada en la Ley Orgánica. Cabe men-  
 "cionar que la prevención consagrada en el artículo 21 de-  
 "la Constitución de 1857, también fue de observancia para-  
 "los Jueces o Magistrados al imponer multas para lo cual -  
 "no deberían exceder de los límites señalados en el precep-  
 "to constitucional citado. Sin embargo, el Constituyente-  
 "de 1917, no entra al debate ni discusión del primer párra-  
 "fo del texto actual del artículo 22 de la constitución, -  
 "que contiene el término de multas excesivas, en atención-  
 "a que contenía la misma prohibición consignada en igual -  
 "precepto de la constitución de 1857. Por lo cual, la nor-  
 "ma constitucional prevista en el artículo 22 de nuestra -  
 "Constitución vigente, reconoce al ser humano como el indi-  
 "viduo sujeto a un proceso, prohibiendo las inútiles, bár-  
 "baras e inhumanas sanciones que en la actualidad fueron -  
 "comúnmente aplicadas como lo fueron la mutilación, la in-  
 "famia, la marca, los azotes, los palos, y cualesquiera -  
 "otras penas ya en desuso por el derecho penal moderno inu-  
 "sitadas, o que afecten a personas diversas del sentenciamen-



DE JUSTICIA  
 ACION  
 DE ACUERDO

PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACION



58  
63

- 21 -

A. D. en R. 2071/93.

"se solicita a ese H. Tribunal Pleno de la Suprema Corte -  
"de Justicia de la Nación, revoque la sentencia que se re-  
"corre."

TERCERO.- Son infundados los anteriores motivos  
de agravio.

En principio conviene señalar que la fracción -  
III del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, -  
vigente desde el primero de enero de mil novecientos ochen-  
ta y cuatro, hasta el año de mil novecientos ochenta y -  
nueve, fue aplicada en la Resolución administrativa de -  
treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y dos, -  
impugnada ante la sala fiscal responsable, en virtud de -  
que el crédito fiscal se generó dentro de la vigencia de -  
aquél. El texto del numeral invocado establecía lo si- -  
guiente:

"Artículo 76.- Cuando la comisión de uno o va-  
"rias infracciones origine la omisión total o parcial en -  
"el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o revo-  
"cadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio -  
"exterior y sea descubierto por las autoridades fiscales -  
"mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación, -  
"se aplicarán las siguientes multas: "...)"

"... III.- El 150 % de las contribuciones omi-

A. D. en R. 2071/93.

"tidas en los demás casos."

Ahora bien, la autoridad recurrente aduce que es inexacto que la multa equivalente al 150 % de las contribuciones omitidas, prevista por el precepto transcrito en el párrafo anterior, sea excesiva y contraria al artículo 22 constitucional, porque el porcentaje de la sanción establecido en relación con el monto de las contribuciones omitidas, lo que permite que el importe de la multa guarde relación con el impuesto no pagado, además de que, en su concepto, de haberse examinado la constitucionalidad de dicho precepto relacionándolo con las demás disposiciones del Título Cuarto, Capítulo Primero del ordenamiento fiscal indicado, el Tribunal Colegiado habría advertido que en la aplicación de las multas se toman en cuenta las condiciones económicas del infractor así como la gravedad de la infracción. Todo ello, se afirma, en virtud de que el Código Fiscal adoptó un procedimiento para la imposición de sanciones tomando en cuenta atenuantes, agravantes, época de pago, la conducta del infractor, reincidencia y su capacidad económica.

La sentencia impugnada considera que el artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es - violatoria del artículo 22 constitucional, el cual prohíbe



59  
C7

la multa excesiva, para lo cual se requiere que se tomen en cuenta las condiciones individuales del infractor en concordancia con el hecho que la motiva.

Con frecuencia se ha alegado que todo el artículo 22 constitucional prohíbe la aplicación de sanciones exclusivamente penales, como son las de mutilación e infamia, la marca, los azotes, los palos y el tormento, y en general cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En su párrafo tercero, como culminación, prohíbe la pena de muerte, con la posibilidad de ser aceptada en la legislación ordinaria para casos sumamente excepcionales que enumera exhaustivamente. Esta última es una sanción exclusivamente penal.

VE JUSTICIA  
CION  
DE ACUERDO

Pero dicha disposición al mencionar sanciones claramente penales incluye igualmente a la multa excesiva y a la confiscación, de bienes, las cuales es factible decretar tanto en tratándose de infracciones penales, como las que ocurren en otras ramas de la normatividad legal, dejando la duda de si la prohibición de la multa excesiva -que se examina en este fallo- debe referirse únicamente a aquella que se impone por la comisión de ilícitos penales, o es igualmente referible a otras faltas o infracciones como podrían ser las de carácter fiscal.

Esta sentencia considera que utilizando el método de mayoría de razón, debe entenderse que si la



Constitución Política de nuestro país prohíbe ciertas sanciones a imponer dentro del derecho represivo, que es el más drástico y radical dentro de las conductas prohibidas normativamente, por extensión y bajo mayoría de razón debe entenderse que si la multa excesiva está prohibida en tratándose de infracciones penales, con mayor razón lógica debe considerársele así en el campo de otras conductas que no se ajustan a la norma legal, como podrían ser los ilícitos administrativos, y específicamente los fiscales. Por ello debe concluirse que las multas deben prohibirse, bajo mandato constitucional, cuando sean excesivas, produzcanse dentro del campo penal, o en cualquier otro. La multa no es una sanción que sólo pueda concebirse en lo penal, es común también a otras ramas del derecho, y así debe decretarse para superar criterios de exclusividad penal, que no están de acuerdo con la naturaleza de las sanciones.

Pero el artículo 22 constitucional que prohíbe cierto tipo de multas no clarifica cuáles son las excesivas a las que específicamente se refiere. Por ello debe intentarse su deslinde.

Si bien el artículo 22 constitucional prohíbe la multa excesiva, lo cual habría de conformarse en los casos pertinentes, otorgando la protección constitucional a aquellas personas a las cuales una autoridad impusiera una multa que presente dichos excesos, el propio artículo 22 no nos



proporciona un concepto de excesividad, sino que para ello es necesario relacionar armónicamente esta disposición con los conceptos de proporcionalidad y equidad que establece la fracción IV, del artículo 31 constitucional.

Es cierto que la multa, como sanción, no tiene equivalencia real con la contribución para los gastos públicos a los cuales se refiere la fracción IV del artículo 31, pero además de que el último párrafo del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación equipara su naturaleza jurídica con las contribuciones, no cabe duda que la Federación, el Distrito Federal, el Estado o los Municipios obtienen, de contribuciones y multas, fondos que deberán aplicar a los gastos públicos, y es entendible que en ambas situaciones aparezcan reglas protectoras de las personas que deben cubrir tanto unas como otras.

Más todavía, los conceptos de proporcionalidad y equidad establecidos por la Constitución en su artículo 31, fracción IV, por extensión lógica, deben regir, en armonía con el citado artículo 22, no solamente las multas fiscales sino también las de carácter administrativo, porque en todas ellas se hace imprescindible la necesidad de individualizar la sanción.

En un primer concepto, por lo tanto, debe entenderse que es criterio deducido del propio sistema



CORTE DE JUSTICIA  
NACIONAL  
GENERAL DE AGENCIAS

constitucional, que para que una multa no resulte atentatoria para los derechos y garantías de las personas -o sea: excesiva-, se requiere que las multas se ajusten a un criterio protector de proporcionalidad y de equidad, tal y como ocurre en las contribuciones.

Efectivamente, para que una multa no resulte excesiva y por tanto, violatoria del artículo 22 constitucional, resulta necesario facultar a la autoridad sancionadora con el objeto de que se encuentre en condiciones de correlacionar dos elementos, a saber:

a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor, y

b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la gravedad de la falta.

Por consiguiente, no basta que el ordenamiento respectivo establezca sólo alguno de los elementos mencionados, ya que de ser así no se daría oportunidad al infractor para demostrar si fue o no su intención causar el daño al incurrir en la conducta prohibida, su mayor o menor capacidad económica, o bien, su grado de responsabilidad en la omisión, constitutiva de la infracción; situación que de no estimarse, podría ocasionar la imposición de una multa excesiva. De ahí



que, si bien importa la gravedad de la lesión, en razón del perjuicio que se ocasionó al Estado en materia tributaria, también importa el grado de responsabilidad o de intención en la conducta del contribuyente al producir la conducta que dio origen a la sanción, como la situación económica en que se encuentra el infractor.

Resulta necesario fijar, no sólo para este caso concreto sino para los futuros, un concepto de excesividad para que se califique a una multa.

LA CORTE DE JUSTICIA  
LA NACIÓN  
LA GENERAL DE AGUASCALIENTES

De la acepción gramatical del vocablo "excesivo", así como de las interpretaciones dadas por la doctrina, y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos:

A).- Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito fiscal.

B).- Una multa es excesiva cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable.

C).- Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos.

D).- Para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe determinarse su monto o cuantía, tomarse en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia de éste en la comisión del hecho que la motiva.

E).- La garantía de prohibición de multas excesivas, contenidas en el artículo 22 constitucional, se presenta en la práctica casi siempre en relación con la determinación concreta de la sanción administrativa, pero esta prohibición comprende también al legislador.

F).- La multa excesiva puede estar establecida en la ley que emana del Poder Legislativo cuando se señalan sanciones fijas que no dan bases para la autoridad administrativa a individualizar esa sanción, permitiendo a ésta un actuar arbitrario, aunque esté dentro de los límites establecidos en la propia ley.

El sistema impositivo de multas por omisión en el pago de contribuciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, viola por parte del Poder Legislativo la prohibición constitucional de imponer multas excesivas, contenidas en el artículo 22 de la Carta Magna.

El artículo 76 del Código establece un sistema de multas fijas, esto es, no contiene mínimos y





máximos, conforme a los cuales la autoridad administrativa que impone la sanción pueda sancionar, ni existe ningún otro precepto legal dentro del Código que obligue a la autoridad fiscal a razonar la imposición de multas, ni éstas deben ser impuestas tomando en cuenta cuestiones como la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, el perjuicio causado a la colectividad, etc. Lo anterior significa que el legislador no otorgó a la autoridad administrativa la facultad discrecional de cuantificar las multas.

De la lectura del artículo 76, tal como se encuentra redactado, vemos que una misma infracción era sancionada con multas de los porcentajes del 50%, 100% y 150%, sobre las contribuciones omitidas.

La cuantía de la multa, no está referida a ninguna circunstancia especial o individualizada del infractor, sino a la rapidez con la que éste decide pagar la multa. Lo que se traduce en que un infractor de la misma naturaleza, puede ser sancionado con multas diversas en su cuantía, dependiendo ese monto de la fecha en que el mismo decida pagar. La posibilidad de ser sancionado con una multa menor, depende no de la gravedad de la infracción o de las condiciones económicas del sujeto, sino de su menor o mayor temor a tener que afrontar una multa que no puede pagar.



E DE JUSTICIA  
NACIONAL  
DEL DE ACUERDO

El legislador, a través del artículo 76 del Código, estableció para sancionar la infracción de que se trate, multas invariables e inflexibles que se aplican igual para todos, de lo que resulta que el infractor con excelentes condiciones económicas no sufre sanción alguna; el de medianos recursos económicos, una multa ligera; y aquél sin recursos económicos, una multa muy grave, produciéndose así una desigualdad absoluta e injusta entre personas que cometieron el mismo ilícito fiscal o incluso entre personas en que la gravedad de la infracción es distinta.

Así, no existiendo en el Código Fiscal de la Federación ningún precepto legal conforme al cual la autoridad administrativa que impone la sanción pueda adecuar su monto de acuerdo a las circunstancias especiales del caso, deteniéndose en el punto que crea conveniente, inspirándose el ejercicio de su facultad en esas circunstancias, sino por el contrario, al establecer multas inflexibles e invariables para todos, está violando la prohibición constitucional establecida en el artículo 22, referente a multas excesivas.

Las multas que contiene el precepto comentado, no son excesivas porque se estime que lo son los porcentajes del 50% o del 100%, o del 150% que antes se establecía. No, aisladamente, si se comparan esos porcentajes con las cantidades que en el anterior Código Fiscal de la Federación se establecían como



62  
66

cuantía de las multas, que eran hasta de tres tantos de la prestación fiscal omitida, tal parecería que el sistema adoptado por el Código Fiscal de la Federación vigente es más benigno. Sin embargo, con independencia de los porcentajes establecidos, el hecho de que en ese ordenamiento legal, conforme al cual se sancionan todas las infracciones por omisiones de contribuciones federales cometidas en el país, a excepción hecha de la omisión de contribuciones al comercio exterior, contenga un sistema rígido e inflexible para la imposición de multas, en el que no se obligue a la autoridad administrativa en el ejercicio de su facultad sancionadora, a individualizar el monto de la multa que imponga, dentro de máximos y mínimos, tomando en cuenta circunstancias como la gravedad de la infracción o la capacidad económica del infractor, hace que el Código Fiscal de la Federación sea violatorio de la referida garantía individual contenida en el artículo 22 constitucional, lo que se traduce en que el Poder Legislativo creó multas excesivas a través de ese ordenamiento legal.

En otras palabras, el Código Fiscal vigente, contiene multas excesivas, no por el porcentaje que se establece, sino porque crea un sistema rígido para la imposición de sanciones en el que cualquier persona es sancionada en la misma forma, bastando para ello el que omita el pago de una contribución y ésta sea descubierta a través de las



CORTE DE JUSTICIA  
A NACIÓN  
GENERAL DE ALCALDES

facultades de comprobación de la administración pública.

La definición gramatical del término "excesivo", conlleva la idea de algo que puede ser comparado entre sí, y solamente se puede ir más adelante de lo debido, lo lícito o razonable, cuando existe algo que es debido, lícito o razonable.

Al crearse un sistema de multas fijas, no existe forma, desde el punto de vista legal, de saber cuándo una multa es excesiva, o sea, cuándo va más allá de lo razonable, ni mucho menos cuándo es arbitraria desproporcionada, ¿razonable conforme a qué? ¿arbitraria o desproporcionada conforme a qué?

Es en ese sentido, que se considera que el sistema que contiene el Código Fiscal de la Federación es violatorio del artículo 22 constitucional, pues instala un sistema rígido para la imposición de sanciones, sin que se establezca para la autoridad administrativa el deber de individualizar el monto de la sanción al caso concreto.

De la lectura del artículo 76, tal como se encontraba antes de la última reforma, se tiene que realmente la única multa que la autoridad aplicaba, era la del 150% de las contribuciones omitidas, pues en los casos del 50% y del 100%, dicha autoridad no estaba obligada a emitir resolución alguna fijando la multa, y



64  
64

ni en este extremo estaba obligada a razonar esa cuantía.

Es por ello que las multas del 50% o del 100%, no pueden considerarse como mínimas, en relación a la multa del 150%, porque su aplicación no está en función de circunstancias conforme a las cuales se individualice la multa por la autoridad administrativa, sino que su cuantía depende de la decisión particular de pagar lo más rápido posible.

Debe concluirse que la introducción en el Código Fiscal del sistema de las multas fijas, pareciera haber sido hecha simplemente para que las autoridades administrativas no tuvieran el problema de razonar el monto de la multa impuesta, lo cual es notoriamente injustificado.

Sólo un punto queda por aclarar en esta conclusión respecto a que el artículo 22 constitucional, si bien contiene preferentemente sanciones penales, en materia de multas pueden referirse, como se ha establecido en esta sentencia, no sólo a las penales, sino a las que impugnan otras normas no penales, como las administrativas en general y las fiscales en lo especial.

En efecto, interpretado el artículo 22 constitucional como una disposición que encara actos que pueden poner en predicamento la vida, la libertad

E JUSTICIA  
ACION  
A DE ACUERDO



personal, y otros derechos fundamentales de las personas, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales otorga manejos procesales consecuentes a este punto de vista. Por ello, y para ejemplificar, el artículo 22 de la Ley de Amparo, en su fracción II, indica que el término de quince días para interponer la demanda de amparo no rige en tratándose, entre otros, de cualesquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional, que como se ha venido analizando incluye la multa excesiva. Así también el artículo 123 que otorga el beneficio de la suspensión de oficio, según su fracción I, cuando se trate de actos de los prohibidos por tal disposición constitucional.

Si se concluyere que tratándose de la imposición de multas excesivas, los agraviados podrían interponer la demanda de amparo contra su aplicación en cualquier tiempo, obteniéndose además el derecho de lograr una suspensión de oficio, de plano y sin substanciación, ello sería verdad si la multa excesiva se derivara de una sentencia que impusiera una sanción penal de carácter pecuniario, como lo es la multa. Pero no lo es en tratándose de multas excesivas impuestas en sede no penal, como las que se analizan en este fallo por extensión, simplemente bajo un razonamiento lógico de mayoría de razón, y tanto sólo para fijar su naturaleza, su contenido y su conceptualización. Es entendible que tal análisis comparativo no puede llevar al extremo de otorgar tratamientos de substanciación



especiales, sólo entendibles bajo la protección de los valores que protege la normatividad penal.

Y este fallo precisa los alcances de su criterio bajo esta clara y expresa limitación.

En consecuencia, ante lo infundado de los agravios de la recurrente, debe concluirse que el artículo 76, fracción III del Código Fiscal de la Federación, al establecer un porcentaje fijo sobre las contribuciones omitidas, impide que al imponer la multa respectiva la autoridad hacendaria tome en consideración la capacidad económica del contribuyente y la gravedad de la falta, cuestión ésta que es indispensable, según quedó precisado en párrafos anteriores.

Similar criterio sostuvo el Tribunal Pleno al resolver entre otros, los siguientes asuntos:

Amparo directo en revisión 5981/90.  
Manufacturera de Reactores, Sociedad Anónima. Sesión de 13 de mayo de 1992. Mayoría de 11 votos.

Amparo en revisión 1025/91.  
Impermeabilizaciones, Recubrimientos y Acabados, S. A. de C. V. 2 de junio de 1992. Mayoría de 11 votos.

DE JUSTICIA  
ACCIÓN  
AL DE ACUERDO

Amparo directo en revisión 4376/90.  
Ferretera El Clavo, S. A. 2 de junio de 1992. Mayoría  
de 12 votos.

Amparo directo en revisión 5820/90.  
Materiales C. R., S. A. 2 de junio de 1992. Mayoría de  
12 votos.

Amparo directo en revisión 1187/92, Franko,  
Sociedad Anónima. 13 de abril de 1994. Mayoría de 13  
votos.

En estas condiciones, al no permitirse a la <sup>PRIMERA CORTE</sup> ~~autoridad~~ <sup>del T. N.</sup> ~~administrativa~~ <sup>del T. N.</sup> ~~individualizar la sanción que~~ <sup>del T. N.</sup> ~~debe imponerse al infractor,~~ ello coloca al gobernado  
ante la expectativa de una multa excesiva y, por tanto,  
el numeral que la regula es contrario al contenido del  
artículo 22 constitucional, lo que se impone confirmar  
la sentencia recurrida en lo que es materia de la  
revisión, y otorgar el amparo y protección de la  
Justicia Federal.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo  
además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se  
resuelve:

PRIMERO.- En la materia de la revisión se  
confirma la sentencia recurrida.



SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Grupo de Consultores Metropolitanos, S. A. de C. V., contra el acto que reclama de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación para el efecto precisado en la parte final del séptimo considerando de la sentencia que se revisa.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Tribunal Colegiado de su origen, y en su oportunidad, archívese el toca.

Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de once votos de los señores ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Relayo, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y Presidente Aguinaco Alemán, con los siguientes resolutivos: en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida; y conceder el amparo a la quejosa en contra del acto que reclama de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, para el efecto precisado en la parte final del séptimo considerando de la sentencia que se revisa. Fue ponente en este asunto el señor ministro Doctor Juventino V. Castro y Castro. Doy fe.

Firman los señores ministros Presidente y Ponente, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

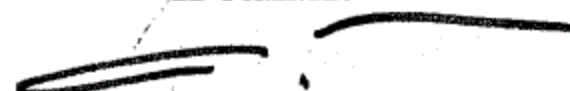
DE JUSTICIA  
ACION  
DE ACUERDO

AMPARO EN REVISION 2071/93

P R E S I D E N T E:

  
VICENTE AGUINACO ALEMAN.

EL PONENTE:

  
DR. JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

  
JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ.

RECIBIDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS  
PARA NOTIFICACION EL 02 JUN. 1995

En 05 JUN. 1995  
notificó la resolución anterior a las partes y al Ministerio Público  
Federal. Conste.